

INFORME CENTRAL

INVERSIÓN SIN RENDIMIENTOS EN CARTERA EDUCATIVA

AGENDA DE ESTADO

YOLANDA SANDOVAL Y MELISSA NOVOA
mf@prensa.com

Laboratorios de talento y empresas de conocimiento. En teoría, esta debería ser la definición creativa de un aula de clases, pero Panamá está muy lejos de utilizar ambos conceptos.

Los indicadores de la calidad de la educación pública son paupérrimos.

Los números despiertan la ira de quienes analizan el sistema, tristeza para los que salen con un diploma debajo del brazo y se dan cuenta de que poco saben de historia o cultura general, y dolor para quienes piensan en el uso que se le puede dar al dinero que se invierte y que no está dando resultado.

Proporcionalmente, el país destina más fondos que Finlandia, Corea, Nueva Zelanda y Canadá, que figuran en el ranking de naciones cuyos alumnos presentan porcentajes superiores al promedio en el desempeño de lectura, por ejemplo, según evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) realizado en 2006.

Panamá invirtió en educación alrededor del 6% del producto interno bruto (PIB) en 2008, y para este año el Gobierno destinará 968.2 millones de dólares, 17.5% del presupuesto.

El fondo destinado a esta cartera viene creciendo desde el año 2000 sistemáticamente, pero cuando se quiere medir el impacto de la millonaria inyección económica, se encuentran incongruencias y resultados patéticos, según las fuentes consultadas y estudiosos del tema.

Los estudiantes muestran deficiencias en cuanto prueba se les haga: matemáticas, ciencias, español, inglés.

Entre 2005 y 2006 el Ministerio de Educación (Meduca) aplicó pruebas de suficiencia académica a 6 mil alumnos de primaria y media, quienes no alcanzaron el 60% mínimo requerido para pasar satisfactoriamente. Para ese momento, el 70% de los estudiantes de secundaria presentaba deficiencias académicas.

Esta realidad no ha variado con el correr de los últimos años, a pesar de que se ha inyectado más capital a la cartera educativa.

Prueba de ello es que en la Universidad de Panamá (UP) la mitad de los estudiantes que realizó la prueba de admisión en 2009, no pasó los exámenes.



Mobiliario. La pobre infraestructura es una constante. LA PRENSA/Roy Hernández

6 mil 376 estudiantes no pudieron obtener el puntaje mínimo (1.00) para entrar a una carrera universitaria. Según las pruebas de admisión, tienen vacíos para entender lo que leen, desconocen temas básicos de las matemáticas como los decimales y no dominan la suma y la resta.

Casi todos estos alumnos eran egresados del sistema estatal; para ser exactos, el 80% obtuvo su bachillerato en una escuela dirigida, financiada y administrada por el Estado.

En las pruebas de inglés, las cosas tampoco han resultado.

Apenas el 0.82% de los que hicieron el examen en la UP en 2008 mostró un manejo avanzado del idioma, mientras que la gran mayoría (93.8%) estaba por debajo del nivel mínimo.

Esto, a pesar de que desde 2005 el Estado destina una parte del presupuesto de inversiones al programa 'English for life', que tiene como objetivo capacitar a estudiantes universitarios y jóvenes de escuela media en el idioma inglés.

El presupuesto asignado para ese programa ha pasado de 2 millones 96 mil dólares en 2005 a 5 millones 500 mil dólares en 2008.

Fulbia e Iris, dos becas por el Instituto Cultural, luego de destacarse como estudiantes sobresalientes de sus escuelas (públicas), conocen en carne propia las deficiencias de un modelo que no hace más que recopilar data negativa.

"Cuando llegué a esta escuela (Instituto Cultural) no hablaba nada de inglés, a pesar de que en mi colegio en educación básica me daban la materia", dijo Iris, quien hoy ocupa el segundo lugar de su clase. Un logro bien ganado tratándose de un colegio bilingüe y con la competencia de un equipo que le llevaba seis años de delantera en contacto con el idioma.

El salto que dio Iris está fundamentado en su disciplina y perseverancia con el estudio, pero también en la metodología, el contenido y seguimiento de sus maestros.

"Tengo amigos que están en sexto año, igual que yo, pero en escuelas públicas, y están dando clases que tomé hace dos años", agrega Fulbia, con tono de sorpresa.

Maira de Thompson, directora general de admisión de la Universidad de Panamá, dice con tristeza que hay estudiantes buenos, como Iris y Fulbia, pero que simplemente son absorbidos por el sistema.

En la dirección de Admisión, Thompson es fiel testigo de lo que pasa en Panamá.

En la prueba en que se mide el léxico, comprensión de lectura, redacción y razonamiento numérico, el promedio de los estudiantes con interés de ser universitarios es de apenas un 40%. Es decir, ni siquiera llegan al mínimo requerido, que es el 71%.

Cuando se hace un cruce de esta información con la del Meduca, los resultados son como una burla para los contribuyentes. "Da frustración saber que hay dinero, pero que al parecer no está bien dirigido", agrega de Thompson.

En un análisis denominado "La persona como generadora de riqueza", de la consultora Goethals Consulting, se ha reflejado el incremento sostenido de los recursos públicos asignados a la educación; sin embargo, el aumento es el resultado del crecimiento de la economía y de la recaudación tributaria y no de una mayor prioridad dada al sector.

De acuerdo con el estudio bajo la dirección de María Echart, especialista en economía de la educación y analista de políticas públicas de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), se requiere de una investigación que permita conocer cuál ha sido el impacto de estos incrementos de recursos sobre la eficacia, eficiencia y equidad de la educación que se brinda.

Queda como duda si en realidad no se estaría, simplemente, "pagando más por lo mismo", lo que compromete las capacidades para generar acuerdos en favor de una mayor prioridad a la inversión.

Ampliamente discutido

La educación es un tema que ha estado en la mesa de discusión al menos en los últimos 15 años. Existen decenas de diagnósticos que dicen básicamente lo mismo: el sistema no funciona.

En el “Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo”, mejor conocido como Serce, en el que se evalúa el desempeño alcanzado por los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe de tercero y sexto grados en lenguaje, matemáticas y ciencias, Panamá fue de uno de los cuatro países que obtuvieron rendimientos más bajos en estas pruebas.

También, el Serce destacó que la infraestructura y los servicios básicos son aspectos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.

Esto demuestra que el problema va mucho más allá de una falta de comprensión o de conocimiento. Una serie de factores inciden en que las condiciones no sean las más adecuadas para que los estudiantes puedan aprender.

Un diagnóstico de la educación nacional presentado por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) destaca que del 30% al 40% de las aulas en los niveles de preescolar, primaria, premedia y media están en condiciones regulares o en mal estado.

Y ese es el rosario de todos los años cuando se inicia el año escolar: reparaciones a medias en las escuelas, sanitarios en condiciones precarias, poco mobiliario, aparte de la fibra de vidrio que afectó a tantas escuelas en 2008.

Cuando esto se traduce en inversión por cada estudiante se estima que para los alumnos de preescolar y primaria se invierten 408 dólares anuales, y para los de premedia y media, 700 dólares en el mismo periodo, de acuerdo con Meduca.

Pero, según Goethals, el Estado panameño gasta, en promedio, mil 228 dólares por cada alumno del sistema escolar oficial, una cifra que se aleja mucho a la anunciada por el Ministerio.

Hay otros análisis que hacen más dramática esta situación.

“La erogación que hace el padre de familia (en la escuela privada) es muy similar a la que hace el Estado (en la escuela pública)”, subraya la presidenta de la Unión de Colegios Particulares de Panamá, Nivia Rossana Castrellón, quien agrega que hay un grave problema de eficiencia administrativa.

Según el diagnóstico de Fudespa, hay una diferencia de escolaridad de 9 años entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre.

Castrellón reconoce que al educador del sector público se le exigen buenos resultados, cuando está dando 20% menos tiempo efectivo de clases que el de la escuela privada debido a las deficiencias existentes en infraestructura. “Explíqueme, ¿cómo lo va a poder hacer?”.

En una escuela pública se dan 37 minutos de clases, mientras que en la privada, de 45 a 60 minutos. “Entonces, estamos hablando de un resultado que va a ser distinto, porque los docentes (en los colegios particulares) tienen más tiempo para enseñar y los niños más tiempo para aprender”.

Mario Almanza, vocero de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, asegura que más del 70% de los directores que son nombrados no son idóneos, muchas veces no participan en concurso y no tienen el perfil para manejar una escuela.

En adición, la entrega fraccionada de los fondos que le corresponden a cada una de las escuelas impide que se puedan resolver problemas que surgen de última hora.

Almanza tampoco está de acuerdo con la forma en que se maneja el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).

A su juicio, existe demasiada burocracia para que el desembolso se haga efectivo, sin contar a su juicio que el dinero no es suficiente para cubrir las necesidades del sector educativo.

Lo que Almanza no toma en cuenta es que el FECE -que se financia con el 27% de lo recaudado en concepto de seguro educativo a todos los trabajadores formales- tuvo un revés en 2008 cuando sufrió un desfaldo por 1.5 millón de dólares en la Dirección Regional de Educación de San Miguelito.

“La corrupción es otro factor que está causando deterioro a la educación. El Meduca es el responsable porque no toma los correctivos, y la Contraloría, porque es la entidad que tiene que fiscalizar el que los fondos sean utilizados adecuadamente”, reprocha el dirigente.

Soluciones sobre el pupitre

Desde 1994, fecha en la que a través de la Fundación del Trabajo se hizo una propuesta de anteproyecto de ley para crear la Ley Orgánica del nuevo sistema educativo panameño, 12 iniciativas han surgido para mejorar la educación en el país.

En cada una se hicieron propuestas y se establecieron metas que llevarían, entre otras cosas, a descentralizar el sistema educativo en 2014.

Y todas tenían cuatro puntos en común: mejorar la equidad en el acceso a la educación, elevar la calidad de los aprendizajes, fortalecer la profesión y, por último, mejorar la gestión administrativa y la inversión en la educación.

En el tema de descentralización, Nivia Rossana Castrellón entiende que este no es un proceso que se logra de la noche a la mañana.

Ella sugiere que se empiece por descentralizar las áreas administrativas básicas, vinculadas con el mantenimiento del centro escolar y con el manejo interno de los recursos.

“Hay colegios de otros países que reciben transferencias del Estado y con eso cubren los gastos de la escuela, incluso la planilla de los educadores”, asegura.

Pero acepta que el modelo que se desee aplicar debe pasar por una serie de validaciones.

Almanza se enfoca en la gestión administrativa. Él propone revisar la ley que norma el FECE para poder hacer los correctivos necesarios.

Propone además crear un fondo de emergencia para cubrir aquellas necesidades que se le presentan a las escuelas y que se salen del presupuesto.

“Su respuesta no debe demorar más de uno o dos meses”, señala.

Paulina Franceschi, coordinadora del proyecto Informe Nacional de Desarrollo Humano, reconoce que se han hecho grandes esfuerzos por identificar qué es lo que está pasando, qué se tiene que hacer y hasta se han establecido metas, pero aún no se ha logrado un consenso en cómo se va a proceder.

En el último informe de Objetivos de Desarrollo del Milenio, Panamá mostró un avance en la cobertura de la educación, pero reconoce que esto no necesariamente representa una mejora en la calidad.

“Podemos tener a los niños en las escuelas pero si no se les están dando los conocimientos, igualmente se está generando un problema”.

El grano de los empresarios

Para Guillermo Carvajalino, que ha analizado la situación educativa en América Latina, los problemas generales en este sector son bastante parecidos en los diferentes países de la región.

América Latina ha mejorado el acceso y la cobertura en educación, pero tiene cuatro años menos de escolaridad que Asia y solo cinco países de la región tienen cobertura secundaria superior al 50%.

El problema se refleja en los pésimos resultados en pruebas nacionales e internacionales y en el hecho de que el 10% más rico tiene 8 años más de escolaridad que el 30% más pobre de la región.

Carvajalino indica que parte del problema consiste en que la responsabilidad se le asigna únicamente al Estado, cuando en realidad el problema va mucho más allá de las acciones e inversiones que pueda hacer el Gobierno.

A pesar de que Panamá es uno de los países en América Latina que más invierte en educación en proporción al PIB, desafortunadamente los niveles de eficiencia de esa inversión son muy bajos.

“Y precisamente allí es donde está nuestra propuesta. En aprovechar el conocimiento y la capacidad de gestión que tiene el mundo empresarial para hacer una administración de los recursos públicos más eficiente y más eficaz”, sugiere.

Carvajalino cita el ejemplo de Colombia, donde los empresarios hacen un aporte al sector educativo, específicamente a las autoridades, ayudándoles a implementar procesos y mecanismos de gestión que permitan administrar mejor los recursos económicos.

En el país suramericano la estrategia parece haber funcionado. En los últimos 6 años se ha logrado incorporar a cerca de 750 mil niños que antes estaban fuera del sistema.

De estos, al menos la mitad fueron incluidos a través de una mejora en el sistema administrativo, y no con más recursos.

“Los gobiernos cambian cada cinco años, y hay una tendencia del nuevo gobierno a decir que quiere hacer cosas distintas. En algunos casos, esto puede ser negativo, porque impide que ciertos procesos se arraiguen en una escuela”, sostiene.

La ministra designada de Educación, Lucinda Molinar, quien toma posesión mañana 1 de julio, ha manifestado su interés de gestar cambios. Tendrá que meterle el hombro al tema administrativo, la capacitación de los docentes y al tiempo que se invierte en cada estudiante.

Se trató de contactar a los que hoy lideran el Ministerio, pero no se obtuvo respuesta sobre el balance de una gestión en rojo.

La educación determina, como bien apunta Goethals, el nivel de ingreso de las personas, su inserción en el mercado laboral, por tanto es uno de los factores que explican la desigualdad en la distribución del ingreso.

Panamá, con un PIB estimado para este año de 24 mil millones de dólares, es por ahora un espejo de inequidad con aulas de clases que gestan más fracasos que éxitos.